

Ministerio Público de Santiago

c/ Jeisson Edmundo Gómez Liberona y Gregory Isaac Gómez Vera

**Delito: Robo con Violencia (recalificado a Desacato a la Autoridad) y
Receptación de Vehículo Motorizado**

R.I.T.: 216-2024.-

R.U.C.: 2300811518-4

Santiago, veintitrés de diciembre del año dos mil veinticuatro. -

Visto, oídos y considerando:

PRIMERO: Que los días 12 y 13 de diciembre del año en curso, ante esta sala del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se llevó a efecto la audiencia relativa a la causa del Rol Interno del Tribunal 216-2024, seguida en contra de **Jeisson Edmundo Gómez Liberona**, Cédula de Identidad N°21.275.442-0, chileno, nacido en Santiago el 11 de abril de 2003, soltero, guardia, domiciliado en pasaje Los Crisantemos N°7014, Población Los Copihues de la comuna de La Florida; y de **Gregory Isaac Gómez Vera**, chileno, cédula de identidad N°21.766.113-7, nacido en Santiago, el 28 de enero de 2005, 19 años de edad, soltero, sin oficio, domiciliado en Laguna Norte 2174, comuna de La Florida; ambos actualmente privados de libertad en libertad por la presente causa.

La acusación fue formulada por el Ministerio Público, representado por la fiscal suplente doña Daniela Martínez Torres, mientras que la defensa del acusado Jeisson Gómez Liberona, estuvo a cargo de las defensora de la Defensoría Penal Pública, doña Miriam Reyes García y doña Ivanna Naulín Donoso; y la del acusado Gregory Gómez Vera, fue ejercida por la abogada doña Camila Cañón Parra, también de la Defensoría Penal Pública; todos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

SEGUNDO: Que, los hechos de la acusación, según el auto de apertura remitido a este Tribunal, fueron expuestos como sigue: *“El día 27 de julio del año 2023, a las 18:40 horas aproximadamente, funcionarios de la Brigada de Investigación criminal de La Florida, efectuaban labores propias de su cargo en Pasaje Los Crisantemos frente al número 7008, comuna de La Florida,*

llegando al lugar un vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, que no portaba la placa patente delantera, conducido por el acusado GREGORY ISSAC GÓMEZ VERA, acercándose el Subinspector ALEJANDRO VILLABLANCA GUTIERREZ, víctima, con la finalidad de realizar un control vehicular, por el costado del copiloto, donde se encontraba el acusado JEISSON EDMUNDO GÓMEZ LIBERONA, indicándole a viva voz la palabra "Policía", momento en que los acusados se dan a la fuga marcha atrás con el Subinspector VILLABLANCA con la mitad del cuerpo al interior del móvil.

El acusado GÓMEZ LIBERONA, con la finalidad de sustraer especies, golpea al Subinspector Villablanca, en sus manos y cuerpo, y le arrebató su arma de servicio correspondiente a una pistola marca Glock, modelo 17, Serie N° BMCH562, calibre 9 Milímetros, con su cargador respectivo con 17 cartuchos, mismo calibre. Luego, los acusados impactan el vehículo en que se movilizaban con otro vehículo que estaba en el lugar, como así también el frontis de un domicilio, saliendo eyectado el Subinspector Villablanca, resultando con lesiones. Luego de una persecución, los acusados dejan abandonado el vehículo en el que se movilizaban, dándose a la fuga con la especie sustraída en su poder.

El vehículo en el que circulaban los acusados portaba en la parte trasera, la placa patente con la sigla LJBR.59, que corresponde a un vehículo marca Jeep, modelo Gran Cherokee, color gris, la cual presentaba signos evidentes de encontrarse adulterada, tanto por el material de su composición como por la falta de signos holográficos y la irregular forma de sus letras y números. Al verificar el número de motor y chasis, se logra determinar que en realidad le corresponde la placa patente RHLT.56, también correspondiente a un vehículo marca Jeep, modelo Gran Cherokee, color gris grafito, el cual mantenía encargo vigente por el delito de robo, código EUN N° 554497, denuncia realizada por la víctima Miguel Ángel Gumucio Castellón, en la Subcomisaría de Chicureo, con fecha 27 de julio de 2023, no pudiendo los acusados menos que conocer el origen ilícito del vehículo, esto es por las circunstancias propias del procedimiento policial, la utilización de patentes falsas de un vehículo de similares características, como así también el hecho

de mantener en el asiento trasero una bolsa de género, que tenía en su interior cuatro llaves de vehículos tipo control inteligente..” SIC.

En concepto del persecutor los hechos referidos configuran el delito de robo con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 432 y 436 inciso 1° del Código Penal y de un delito de receptación de vehículo motorizado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 456 Bis A del Código del Ramo, estimando que ambos se encuentran en carácter de consumados.

Se les atribuyó a los acusados, participación en calidad de autor en los dos ilícitos, conforme a lo dispuesto en el N°1 del artículo 15 del Código Punitivo.

Consideró el Ministerio Público, asimismo, que, respecto de ambos encausados, no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Por lo anterior, requirió se imponga a los acusados Gómez Liberona y Gómez Vera, la pena de **di** mensuales como autores del delito de receptación, en ambos casos, más las accesorias legales correspondientes, se ordene el comiso de las especies incautadas, así como al pago de las costas de la causa y, se cumpla con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970.-

Tercero: Que, **en su alegato de apertura, el Ministerio Público**, efectuó la promesa de acreditar los hechos y la participación de los acusados, anunciando la prueba con la cual cuenta. Respecto del robo, señaló que se apreciará en las cámaras de seguridad la forma cómo ocurrieron los hechos, más la declaración de los funcionarios policiales que se vieron afectados; así mismo, anunció el resto de la prueba con la cual cuenta para establecer los hechos, tanto como la participación de los acusados en éstos.

En su **alegato de clausura** el persecutor, destaca que la participación de los acusados en el lugar de los hechos ha quedado acreditada, así como la circunstancia de que Jeisson Gómez iba de copiloto en un vehículo Jeep Cherokee y Gregory Gómez lo conducía, recordando que la víctima, el funcionario de la Policía de Investigaciones fue golpeado y forcejeó con los imputados para evitar que le quitaran el arma. También se refirió a la prueba científica pericial de las huellas que se levantaron del auto, que posicionaron a Gregory en el vehículo el día de los hechos.

Señala que la controversia del caso se centrará en determinar si las conductas de los acusados se encuadran en los dos ilícitos penales invocados, robo con violencia y receptación, sosteniendo que el delito de robo con violencia se consumó cuando los imputados tomaron la decisión de realizar acciones para apropiarse del arma y ejercieron violencia para dominar la voluntad de la víctima, causándole lesiones que fueron establecidas y, demostrándose, además, que ambos participaron en la ejecución de los actos que tienen por objeto la apropiación del arma.

También argumenta que el delito de recepción se acredita porque los imputados se movilizaban en un vehículo robado y tenían elementos conocidos para cometer el delito de robo de vehículos, concluyendo que ambos delitos han sido acreditados más allá de toda duda razonable, solicitando un veredicto condenatorio

Cuarto: Que, la defensa del acusado **Gómez Liberona**, en su alegato de apertura, señaló que se está frente a una acusación que parece ser compleja, pero tiene un motivo muy simple, cual es, defenderse de una presunta agresión y quedará establecido que su representado no tenía intención alguna de apropiarse del arma.

Por otra parte, manifestó que su representado no tenía conocimiento que el auto era robado y no tenía como saberlo, solicitando la absolución por ambos delitos.

En su **alegato de clausura** la defensa de **Jeisson Gómez** sostuvo que su cliente debe ser absuelto de los delitos por los cuales ha sido acusado.

Respecto del delito de receptación la defensa argumentó que el elemento subjetivo, es decir, el conocimiento de que el vehículo había sido robado, no ha sido establecido por parte del Ministerio Público, por cuanto la prueba presentada no demuestra que Gómez Liberona tuviera conocimiento de que el vehículo había sido robado. La defensa también destaca que el persecutor debió presentar un experto, que fue la perito Marcela Gil, quien examinó las patentes del vehículo y requirió instrumentos específicos para establecer la falsedad de las patentes, lo que sugiere que Jeisson Gómez

Liberona no podría haber sabido a simple vista que éstas eran falsas y no había ninguna señal evidente que el vehículo había sido robado.

En relación con el delito de robo con intimidación, argumentó que el ánimo de lucro, un elemento clave del delito de robo con intimidación, no ha sido establecido por parte del Ministerio Público, así como tampoco fue descrito en los hechos de la acusación, por lo que se afectaría el principio de congruencia. También destacó que la reacción de Jeisson Gómez Liberona ante la situación de peligro en la que se encontraba fue la normal y esperable, se enfrentó a la posibilidad de ser abordado y, encontrándose encandilado es que lo abordó un tercero apuntándolo con un arma. El arma cayó en el interior del vehículo y se estableció que fue devuelta, lo que demuestra que no hay evidencia de que tuviera intención de lucrar o de disponer de la especie.

Indicó, que estima que podría estarse frente a una hipótesis de atentado calificado contra la autoridad del artículo 262, número 2 del Código Penal, o una figura especial de la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones, contenida en el Decreto Ley N°2.460, en particular el artículo 17 número 4.

Como petición principal solicita la absolución de su representado de los delitos por los cuales ha sido acusado y, en subsidio, solicita la recalificación del delito de robo con violencia a una de las figuras señaladas

A su turno, la **defensa** del acusado **Gregory Gómez Vera** solicita la absolución de su representado por ambos delitos por los cuales fue acusado, manifestando que el Ministerio Público tendrá un problema para acreditar los hechos descritos en la acusación, ya que con la simple lectura se desprende que es el coimputado quién golpeó al funcionario.

En cuanto a la receptación, no solo se exige que esté en posesión del vehículo, sino que también tenía el conocimiento que este vehículo era robado, esto es, que se debe acreditar el elemento subjetivo.

En su **alegato de clausura**, la defensora de **Gómez Vera** destacó la importancia de recordar que el Ministerio Público debe probar los hechos descritos en la acusación.

Respecto de la receptación de vehículo motorizado, señaló que el Ministerio Público no ha presentado suficiente evidencia para demostrar que su representado tenía conocimiento de que el vehículo era robado. Destacó que la placa patente delantera estaba ubicada en el parabrisas y que no había indicios de que fuera falsa a simple vista. También menciona que el coimputado había comprado el vehículo y se lo había entregado al acusado para su conducción durante un momento, no discute el aspecto objetivo. Sin embargo, en cuanto al elemento subjetivo no hay prueba, el vehículo mantenía una placa patente en el parabrisas y para acreditar que ésta era falsa, el persecutor debió presentar un perito que realizó varias diligencias, debiendo incluso utilizar un instrumento especial para llegar a esa conclusión, pareciéndole entonces que su representado no estaba en condiciones de saberlo, porque incluso era un vehículo que no tenía daños.

En relación con el delito de robo con violencia argumentó que no hay antecedentes para establecerlo, ni se cumplen con los presupuestos del tipo penal. Destacó que el ánimo de lucro no está demostrado y que la violencia ejercida por el coimputado no es suficiente para justificar el delito, agregando que la lesión del funcionario no es compatible con la acusación.

Descartó la existencia de un dolo común, puesto que demostró que los hechos ocurrieron en 30 segundos y a su defendido solo se le puede atribuir que puso marcha atrás, comenzando a acelerar cuando el funcionario se acercó a la ventana con el arma en la manos, estimando que como tenía la música muy fuerte lo más probable es que no escucharan la señal de alto y la identificación del policía; sosteniendo que su representado no participó en el delito de robo con violencia y que no hay elementos para demostrar una coautoría. Destaca que el acusado no tenía conocimiento de la intención del coimputado y que su acción de retroceder con el vehículo fue una reacción a la presencia del funcionario de Investigaciones.

Concluye que no hay suficientes elementos para demostrar la culpabilidad del acusado en ambos delitos, solicitando se considere la posibilidad de un delito menor, como un atentado contra la autoridad, si se considera que el acusado sabía que eran funcionarios policiales. Finalmente,

solicita la absolución de su defendido debido a la duda razonable que los hechos hayan ocurrido como se describe en la acusación.

QUINTO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 326 del Código Procesal Penal, los acusados, fueron advertidos legalmente de sus derechos y de las obligaciones que les asisten, y al ser consultados **Gregory Gómez Vera**, hizo uso de su derecho a guardar silencio, mientras que **Jeisson Gómez Liberona** renunció a este derecho y a modo de defensa, prestó declaración, manifestando lo siguiente: que se compró el vehículo por Market Place, que se contactó con la persona que lo vendía con quien se juntó en el metro la Cisterna. Indicó que estaba publicado en \$6.500.000, le ofreció \$6.000.000 y finalmente acordaron un precio de \$6.200.000. El vendedor le dijo que el vehículo estaba en prenda, que no se podía realizar la transacción directa y le hizo un poder de compra. Como era primera vez que compraba un vehículo no entendía y se dio cuenta que cometió un error. La vendedora le dijo que tenía un familiar que trabajaba en una notaría, y cuando estaban al frente del local le pidió su carné y le dijo que se iba a demorar poco, él no la acompañó. Volvió al poco rato con los papeles firmados y timbrados por la notaría y con un código QR, que pudo ver, los escaneó y aparecía su nombre y el nombre de la persona a la cual se supone que le estaba vendiendo este vehículo, que se presentó como Valeska Estrella Fuentes. Le pasó la plata y se fue con el vehículo. Preciso que eso fue al mediodía del día 27 de junio de 2023 y que con ella solo se comunicó por redes sociales, sin embargo todos estos mensajes se borraron después.

Se fue al domicilio de su expareja, ubicado en Los Ciro 5902, La Florida y después se fue a su casa como a las seis y media y en el camino se encontró con su primo, al frente de la multi cancha. Éste se subió a la camioneta, preguntándole si la podía conducir y como estaban muy cerca de la casa le dijo que bueno. Se dirigieron a su casa y llegando a su domicilio se encontraron con un furgón al medio de la calle que tenía las luces altas, lo que le impedía ver bien y, además, venían con la música muy fuerte. En su casa estaba estacionada la camioneta de su hermano, entonces se iban a detener frente a la casa de su vecino y repentinamente vio a una persona que se acercaba por

el lado del copiloto que tenía un arma, que se la puso en la cara y que apuntaba también a su primo. En ningún momento escuchó la palabra de algún funcionario, solo de alguien que le decía: “bájate concha de tu madre”, reiteradamente. Pensó que les iban a robar la camioneta y así se lo dijo a su primo, entonces éste puso reversa, su única reacción fue cubrirse el rostro y ahí esta persona se colgó de la camioneta, corriendo al lado de ella y al llegar al final del pasaje esta persona se soltó, cayó y ellos huyeron; con miedo porque no entendía qué estaba pasando.

Cuando iban por la calle Los Aralios miró hacia sus pies y se dio cuenta que había un arma y la lanzó por la ventana hacia la plaza Salvador Allende, porque no quería meterse en ningún problema. Se separaron con su primo y no tuvieron más contacto. Después llamó por teléfono a su casa para saber qué estaba pasando y le dijeron que funcionarios de la Policía de Investigaciones lo estaban buscando por haberles sustraído un arma. En ese momento se dio cuenta que quien lo había apuntado era un policía, volvió al lugar donde la había lanzado y recuperó el arma, y la escondió en un basurero. Se encontró con una persona a la que conocía de vista, porque vivía en la población, que lo acompañó y avisó a la Policía de Investigaciones dónde estaba el arma.

Nunca pretendió robar el arma al funcionario o atentarse contra su vida, fue un error quizás salir de ahí, pero la verdad es que en el momento en que lo estaban apuntando sintió que su vida corría peligro. Esta persona no se presentó como un funcionario policial.

En la mañana compró el vehículo, porque era su día libre. Lo pagó en efectivo con el dinero que recibe por los arriendos de la casa, lo que acuerdan por “trato”, y además con lo que gana como guardia de seguridad. El comprobante fue el papel de compra del vehículo, cuando lo recuperó le avisó a su abogada para que lo presentara y ella dijo que la investigación estaba cerrada.

En el papel aparecía el nombre Waleska Estrella Fuentes y fueron a la Notaría Martín Vásquez Cordero, ubicada en avenida José Miguel Carrera, en El Llano.

Explicó que esta persona ingresó con su carné de identidad y él la esperó junto al vehículo, como ella se dio cuenta que andaba un poco apurado le ofreció que podía ayudarla en el trámite un familiar que trabajaba allí y así no tendría que hacer fila. Cuando volvió le hizo firmar dos copias del papel, ella se quedó con una copia y le devolvió su cédula de identidad y él se fue con el vehículo.

Agregó que no revisó los papeles del auto, porque era la primera vez que compraba un vehículo, ni siquiera lo pudo revisar bien, ver si tenía algún detalle. Solo lo revisó por dentro y le gustó porque estaba impecable.

La primera vez que vio el vehículo que compró fue cuando llegó al metro La Cisterna, fueron en la misma camioneta hasta la Notaria. El dinero se lo pasó a la dueña arriba del auto, después que esta persona le trajo el papel, a quien no ha vuelto a ver. La patente estaba en el vidrio, le preguntó por qué estaba ahí y ella le dijo que la habían chocado hacía unos días atrás y lo había arreglado y la patente quedó ahí.

Casi al llegar a su domicilio fue que se encontró con su primo, Gregory Gómez. Cuando entraron a su pasaje no podía ver bien porque se encandiló con las luces altas, tenía un vehículo al frente, incluso esa camioneta les estaba dando la pasada, aunque no se veía bien, lo único que vio fue una persona que tenía la mitad del cuerpo dentro del vehículo y que los apuntaba con arma de fuego a la cara, que con su brazo se afirmó entre la ventana y la puerta, porque iba con el vidrio abajo. Cuando su primo puso reversa esta persona seguía afirmada y se puso a correr con el vehículo llegando hasta el final del pasaje, que tiene como unos 50 metros. No sabría decir si chocaron con algún auto, no sintió ningún impacto. Salieron por calle Los Aralios hasta llegar a la avenida La Florida, dos paraderos más abajo. Después se bajó de la camioneta, la dejó botada y corrió y corrió hasta esconderse. Quedó en shock y no se dio cuenta si los seguían. Lo detuvieron el día 4 de abril.

La pistola la lanzó como a una cuadra y media de distancia de su domicilio. No sabe cuánto tiempo transcurrió antes que fuera a buscarla.

Explicó que esa persona con la que se encontró después, solo lo acompañó a buscar el arma y a llamar a la Policía de Investigaciones.

SEXTO: Que, el Ministerio Público cumplió con su obligación de acreditar los hechos fundantes de la acusación, mediante la prueba incorporada en la audiencia de juicio oral, consistente en las declaraciones del funcionario de la Policía de Investigaciones que se vio afectado por el hecho, Alejandro Villablanca Gutiérrez, más las de sus acompañantes, Inspector Jean Paul Llanco Muñoz y Detective Bastián Andrés Vargas Collao; prueba pericial consistentes en las declaraciones del perito mecánico Felipe Achurra Bravo, de la perito en huellas dactilares, Claudia Cisternas Jeldres y de la perito documental, Marcela Gil Silva; prueba documental compuesta por el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo sustraído y objeto de la receptación, placa patente única RHLT.56; el Parte denuncia N°37, de fecha 27 de julio de 2023, de la Subcomisaria de Chicureo, que da cuenta de la denuncia por robo del vehículo individualizado precedentemente; acta de encargo de vehículos código EUN N°554497, de fecha 27 de julio de 2023, respecto al vehículo placa patente única RHLT.56; certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro del Vehículos Motorizados correspondiente al automóvil P.P.U. LJBR.59; y, Dato de atención de urgencia N 39581463, de fecha 27 de julio de 2023, del Sapu José Alvo, que da cuenta de las lesiones de la víctima Alejandro Villablanca Gutiérrez. más otros medios de pruebas, consistentes en las grabaciones de una cámara de seguridad, fotografías de lugar donde fue abandonado el vehículo receptado por los acusados y otras fotografías del vehículo y de las especies encontradas en su interior.

Que, de esta forma y en primer lugar, a fin de establecer los elementos constitutivos del primer tipo penal por el cual se acusó, esto es, el delito de robo con violencia, se tiene presente que este ilícito se encuentra descrito en el artículo 436 del Código Penal, disposición legal que debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 432 del mismo cuerpo normativo, de cuyo examen se distinguen como elementos del tipo, la apropiación de especie mueble ajena con ánimo de lucro, sin la voluntad de su dueño, ejerciendo para este fin, violencia en las personas.

Es necesario de esta forma, que existan “los malos tratamientos de obra, las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya

para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega”, situación que de acuerdo a la prueba rendida no se acreditó en los hechos, desde que no fue posible tener establecida, la sustracción de la especie con ánimo del lucro y, que ante la falta de este elemento, la violencia pudo ser consecuencia de otro motivo o razón, es decir no estaba relacionada directamente con la sustracción; de manera que como se señaló en el veredicto correspondiente, se decidió recalificar los hechos a un delito previsto en el artículo 261 del Código Penal, sancionado en el artículo 262 N°2, del mismo cuerpo normativo, esto es, un atentado contra la autoridad, según se analizará con posterioridad a la exposición de la prueba rendida.

Que, por otra parte, conforme lo señala el artículo 456 bis A del Código Penal, el tipo objetivo del tipo penal de receptación, lo conforman diversas acciones, *tener en su poder el agente, o comprar, o vender o comercializar*, a cualquier título, cosas muebles robadas o hurtadas, el objeto material de la acción son las cosas muebles robadas o hurtadas, que debe corresponder a un vehículo motorizado y, por último, el tipo subjetivo, como todos, requiere el conocimiento de quien tiene la especie, que se trata de un bien robado o hurtado, extendiéndolo a quien *no pudiese menos que conocerlo*; cumpliéndose en este caso todos los requisitos del tipo penal, de acuerdo con el análisis de la prueba que se efectuará más adelante.

Que, atendido a que la prueba que se rindió está íntimamente relacionada y sirvió de sustento para la acreditación de los dos delitos que se tuvieron por establecido, se expondrán, previo a su análisis, en forma resumida.

SÉPTIMO: Alejandro Antonio Villablanca Gutiérrez, Inspector de la Policía de investigaciones de dotación de la Brigada de Investigación Criminal de La Florida, quien manifestó que se vio involucrado en los hechos ocurridos el día 27 de julio de 2023, a las 18:40 horas, con el equipo de trabajo compuesto por los Inspectores Jean Llancao Muñoz y Bastián Vargas Collao y el detective Han Vargas Pérez, con quienes se encontraba diligenciando órdenes de detención en calle Los Crisantemos, ubicada en la población Los

Copihues de la comuna de La Florida. En el lugar se encontraban en un vehículo policial y ellos llevaban chalecos antibalas, los cuales tienen logos corporativos, polera de combate que tiene parches a los costados, pantalones beige tipo cargo y botas tácticas.

Estando en el lugar observaron ingresar por calle los Crisantemos de sur a norte, una camioneta marca Jeep, modelo Grand Cherokee, sin su placa patente delantera. El Inspector Jean Llancao, les señaló por el aparato radial que pusieran atención al vehículo y que le efectuaran un control de identidad a los ocupantes. La camioneta se acercó mucho al vehículo policial, él a su vez se acercó a la camioneta, levantó la mano y a viva voz se identificó como policía. Cuando los sujetos en el interior se percataron que ellos eran policías, comenzaron a retroceder y al advertir la acción de huida desenfundó su arma, se acercó a la ventana insistiendo en que no huyeran y al moverse la camioneta se desestabilizó debiendo afirmarse de la ventana, manteniendo su arma empuñada en la mano derecha, momento en que le tomaron el arma que la tenía en el umbral de la ventana sujeta con la mano derecha. Forcejeó con el copiloto porque comenzó a tratar de arrebatarla, éste le golpeó la mano izquierda y lo tiraron hacia adentro, mientras el piloto aumentó la velocidad de huida, ya que el copiloto le gritaba que acelerara, quedando con la mitad de su cuerpo adentro y la otra afuera. Advirtió que el copiloto chequeó el retrovisor mientras iba colgando y cree que vio un vehículo que estaba estacionado en el costado poniente del pasaje Los Crisantemos, intentando hacer una maniobra para acercar la camioneta hacia ese vehículo y aplastarlo. Como la camioneta tiene un motor rápido y piensa puede ser difícil maniobrarla, el conductor perdió el control y golpeó al vehículo, pero con su parte posterior y con ese golpe él se soltó, salió eyectado y su arma quedó dentro del vehículo. Con el forcejeo quedó con una herida en su mano izquierda, una escoriación. Una vez que salió eyectado, dos de sus compañeros venían corriendo y otro en el vehículo policial con las sirenas y balizas encendidas.

Agregó que reconoció al copiloto porque fue un blanco de investigación que había tenido con anterioridad, en una causa de microtráfico, y lo identificó como Jeisson Gómez Liberona.

Después que cayó, todos abordaron el vehículo policial y comenzaron una persecución de los sujetos, sin embargo, el vehículo policial tenía una menor capacidad y los perdieron de vista, pero advirtieron la ruta que seguían porque fueron observando diferentes vehículos que estaban chocados en la vía pública y las personas les apuntaban hacia dónde había doblado. Los siguieron por avenida La Florida hasta Departamental, donde les indicaron que iban hacia el poniente y encontraron el vehículo sin los ocupantes, en los Bambúes esquina Las Llaquetas.

Comenzaron a trabajar con las evidencias que encontraron en la camioneta, dos celulares y llaves para clonar, revisaron la patente porque estimaron que no correspondía a la original y llamaron a funcionarios del Laboratorio de Criminalística para que se hicieran cargo de las evidencias, a excepción de los teléfonos.

Como tenía identificado al copiloto, en la unidad comenzaron a explorar las fuentes de información, advirtiendo que Jeisson había sido detenido por otros delitos, y tenía como compañeros en éstos, a Gregory Gómez Vera. Le hicieron ver fotografías y reconoció a este sujeto como el conductor. Después se realizaron diligencias en las cuales no participó porque no contaba con su arma de cargo.

Con los dos sujetos reconocidos se dio cuenta a la fiscalía y el procedimiento sigue a cargo del Inspector Jean LLanco.

El vehículo había sido sustraído el día anterior, se contactaron con la víctima y les refirió que se lo habían robado cuando le dejó estacionado en la casa de un amigo.

Se le exhibe el video contenido en la Letra d) del N°5 de Otros Medios de Prueba, señalando que él se ve al lado izquierdo de la pantalla junto a sus tres compañeros, el furgón blanco es el vehículo policial, por el frente tiene el distintivo, se ve ingresar la camioneta y cuando se va acercando, el vehículo policial enciende las balizas, se ve que él se acerca la camioneta y levanta la mano advirtiéndoles que era policía, cuando ve que el auto inmediatamente retrocede, caminó más rápido hacia éste y desenfundó su arma, indicándoles en todo momento que era policía y que se detuvieran, pero se ve que la

camioneta aumenta la velocidad y también el vehículo policial los sigue y se ve dos funcionarios corriendo.

Cuando cayó logró ver la placa patente trasera pero no alcanzaba a distinguirla. Al momento de ingresar el vehículo al pasaje, se ve que tenía un trozo blanco en el parabrisas, pero en el momento de los hechos su atención estaba concentrada en las personas que iban en el interior del vehículo.

Resultó con una excoriación en la mano izquierda, que quedó más próxima al copiloto y es que tomando esa mano lo impulsan hacia el interior del vehículo, en ningún momento tuvo la intención que quedar colgado del vehículo.

Durante el transcurso de la noche recuperó el arma de cargo, debido a que se recibió una llamada en la guardia de la unidad policía, en la cual se indicó que el arma la dejarían en la plaza Salvador Allende. Fueron en su busca y la encontraron en el interior de un basurero en una funda de cojín. Le faltaban tres tiros, porque tiene una capacidad de 17 tiros y tenía 14.

Las placas patentes falsas que tenía la camioneta fueron levantadas por los recolectores de evidencia.

La camioneta venía con música fuerte que se escuchaba desde el exterior, agregando que advirtió que tenía luces diferentes a las originales, que eran más potentes, por eso estuvo seguro de que los vieron con claridad.

Explicó que caminó tres pasos hacia la camioneta y levantó la mano, haciéndoles la señal a los ocupantes que se detuvieran, ahí comenzaron a retroceder, luego dio otros tres pasos hasta llegar a la camioneta mientras iba sacando el arma.

Agregó que el arma, marca Glock, la había adquirido en forma particular para utilizar como arma de cargo

Reconoció a ambos acusados en la sala.

Miguel Ángel Gumucio Castellón, quien manifestó que sabe que está presente porque el 26 de julio de 2023, le robaron su vehículo, marca Jeep, modelo Grand Cherokee, placa patente RHLT.56, en avenida Luis Carrera de la comuna de Vitacura. Manifestó que en circunstancias que fue de visita a la casa de un amigo lo dejó estacionado en la avenida indicada y cuando salió ya

no estaba. Llamó a seguridad ciudadana y vio las cámaras del edificio de enfrente, donde vio que se prendían las luces y se lo llevaban. Hizo la denuncia correspondiente.

Al día siguiente le avisaron que lo habían encontrado y dos días después lo retiró desde un cuartel policial, constatando que mantenía varios choques en la parte delantera izquierda y en la trasera derecha; agregando que antes que se lo robaran no tenía ningún daño y las placas patentes las mantenía en el lugar que corresponde.

Felipe César Achurra Bravo, quien refirió ser ingeniero mecánico y desempeñarse como perito de la Policía de Investigaciones del Laboratorio de Criminalística Central, señalando que el 27 de julio de 2024, lo convocaron para identificar un vehículo, en base al número de serie del motor y chasis, con las que puede asociarlo a una placa patente inscrita en el Registro Civil.

Para tal efecto se constituyó en pasaje Los Bambúes, en la comuna de La Florida, donde inspeccionó un vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, en mal estado de conservación estructural, estaba con bastantes daños y no presentaba sus placas patentes en la parte anterior y posterior, pero sí había una placa, LBJR.59, en el tablero de instrumentos.

Examinó el vehículo constatando que el chasis presentaba su soporte sin adulterar y la serie era la correcta, como es un vehículo americano, los últimos dígitos de la serie de motor también correspondían y los asoció con una placa patente que se iniciaba con las letras RH, sin recordar las otras letras ni los números; concluyendo que estaba en el interior del Jeep no correspondía con ese vehículo.

Se le exhibe la fotografía 8 del Set 4 de Otros Medios de Prueba, reconociendo en la imagen el vehículo que inspeccionó.

Marcela María Gil Silva, quien manifestó ser perito documental de la Policía de Investigaciones del Laboratorio de Criminalística y se le solicitó realizar un informe pericial documental, a dos placas patentes, delantera y trasera con la serie alfanumérica LJBR.59, que se le remitieron a través de la sección custodia de evidencias del Laboratorio de Criminalística.

Al examinarlas se encontraron similitudes en el tamaño y forma general de las placas patentes, como en los colores y letras, sin embargo, al examen detallado se observó que el aluminio en que estaba confeccionadas las placas patentes era distinto a las genuinas. Se observó, además, que faltaba el anodizado que corresponde al reverso de las placas, que las hace ver opacas; las letras y los números presentaban perfiles poco definidos; la pintura era de fácil remoción, todo lo cual no coincide con las placas genuinas.

Además, faltaban elementos de seguridad, como el sello holográfico que presentan las letras y los guarismos, que es un holograma que viene en las siglas del Registro Civil.

En consecuencia, se determinó que las placas patentes con serie alfanumérica LBJR.59, son falsas.

Se le exhibe otros medios de prueba N°3: fotos 1 y 2: señalando que son las placas patentes dubitadas delantera y trasera. Se puede ver que las letras no están bien definidas, la pintura se sacaba fácilmente y con instrumental se ven que faltan las medidas de seguridad, como el sello holográfico, al reverso, falta el anodizado; frente a las imágenes de las fotos 4,5 y 6, señala que las fotos de la izquierda corresponden a las placas patentes dubitadas y las otras a las muestras genuinas, la impresión no se corresponde con las auténticas, es más delgada y borrosa.

Comparando las letras éstas no se condicen, los bordes y la pintura son distintos, el sistema de impresión es diferente. En el caso del número no se aprecia el holograma del Registro Civil, que solo se observa con la luz a cierto grado o inclinación.

Toda la observación inicialmente es a primera vista y después se usa el instrumental que es el video espectro comparador, lo aplicó con luces respecto del anodizado y del sello holográfico, comprobando que no estaba.

Claudia Jeanette Cisternas Jeldres, quien refirió ser perito en huellas dactilares del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Manifestó al tribunal haber realizado el peritaje 1089/2023, que es una pericia dactiloscópica que se realizó en evidencias levantadas por personal de la sección de recuperadores criminalísticos del Laboratorio, que en esta ocasión

fueron Nicolás Espinoza y Carlos González, quienes concurrieron al sitio del suceso el día 27 de julio de 2023.

Indicó que, en horas de la noche levantaron evidencias desde un vehículo marca Jeep, modelo Cherokee, placa patente LJBR.59, desde el cual tomaron 15 trozos de huellas dactilares, correspondientes a la NUE 6861731. Desde el lugar ellos también levantaron dos placas patentes, con cadena de custodia NUE 6861732. Agregó que aproximadamente a la una de la mañana le entregaron por mano estas especies.

En dependencias del Laboratorio se procedió a hacer un desglose y estos trozos de huellas fueron rotulados para efectos de análisis como HD1 a HD15, se procedió a analizar con la lupa dactiloscópica los quince trozos, de los cuales, solo el HD 14 no reunía las condiciones útiles para hacer una identificación.

A estos trozos se les procedió a aplicar el reactivo cianoacrilato, que se aplica en una cámara en el laboratorio, porque al ser expuesto a condiciones de calor y humedad se convierte en vapor y este reacciona adhiriéndose a las grasas que tienen las huellas dactilares, razón por la cual se aplicó a las placas patentes que se habían levantado también en el sitio del suceso. Mientras se esperaba el tiempo que se necesita para ver el resultado del reactivo, se procedió a hacer el descarte con los nombres que sus colegas consignaron en la hoja de levantamiento, entre los cuales se señalaba el del Subinspector Alejandro Villablanca y el de dos personas sospechas Jeisson Gómez Liberona y Gregory Gómez Vera. Realizado el cotejo con las huellas dactilares de estas personas que están disponibles en el terminal biométrico del Servicio de Registro Civil y los 14 trozos de huellas que útiles, se pudo establecer que 8 de ellos correspondían a Gregory Isaac Gómez Vera. Estos trozos correspondían al trozo 3, que correspondía al dedo medio izquierdo de esta persona, el 4 al medio derecho, el 8 al pulgar izquierdo, el trozo 9 y 11 correspondían a un mismo tipo de dibujo y corresponden al meñique derecho de esta persona. Y los trozos 5, 10 y 12 también correspondían a un mismo tipo de dibujo, en este caso, al anular derecho de esta persona. Seguidamente, ya transcurrió el tiempo necesario para la reacción del reactivo ya mencionado.

Este reactivo genera un vapor sólido en polvo que se adhiere a las patentes, a las superficies que tienen grasa de color blanco y lo aplicaron para hacer el contraste, en las cuales solo se revelaron dos trozos de huellas dactilares, a las cuales las signaron con el N°16 y N°17 y se estableció que no reunían las condiciones para una revisión dactiloscópica.

Posteriormente, como a las cinco de la madrugada, el comisario Vidal, presentó una solicitud de pericia de la pistola marca Glock, a la cual se le aplicó el mismo procedimiento y la cual no reveló huellas dactilares, ni en el arma ni en el cargador.

Con posterioridad, el día 31 de julio, vía telefónica, los oficiales informaron de dos personas más para descarte, que fueron el dueño del vehículo y Jeisson Gómez Liberona, a quien tenían como sospechoso. A estas dos personas se les procedió también a visualizar sus impresiones en Servicio de Registro Civil y a comparar con los trozos que quedaban sin identificar, que eran los números 1, 2, 6, 7, 13 y 15; estableciéndose que no correspondía a ninguno de ellos; por lo que se procedió a investigar en la base de datos que posee la Policía de Investigaciones, que es el sistema AFIS. Se ingresaron a investigar y tampoco hubo resultado positivo en esta base de datos.

Seguidamente se ingresaron estos mismos trozos de huellas dactilares a la base de investigación del Servicio de Registro Civil, al sistema Morfo y con ello hubo coincidencia para un trozo de huella con un RUT a nombre de Diego Valdebenito Muñoz. Luego se procedió a visualizar en la base de datos del Registro Civil las impresiones de Diego Valdebenito o Villa Blanca, señalando que no recordaba exactamente el apellido de la persona. Y se comparó con estos seis trozos que todavía no eran identificados y se estableció que el trozo 6 y 7 correspondían a Diego y eran los dedos índices izquierdo y medio izquierdo de él.

Finalmente, se logró establecer que quedaron cuatro trozos sin identificar, que eran los trozos 1, 2, 13 y 15, y los trozos signados con los números 14 y 16 y 17 no eran útiles para hacer una identificación dactiloscópica.

Indicó que según la información ingresada estos trozos de huellas fueron revelados de todas las puertas, por la cara exterior, uno de ellos del interior, del

capó, de la radio o pantalla táctil de la radio y de dos celulares que había al interior del vehículo.

Se le exhiben imágenes de la prueba contenida en la Letra D N°2, fotos 1 y 2, señalando que corresponden a una comparación entre dos imágenes, el dactilograma indubitado de los archivos dactiloscópicos del Registro Civil y la segunda, corresponde a la huella dactilar N°10, que es el dedo anular derecho de Gregory Gómez Vera, revelada de la puerta trasera izquierda.

Jean Paul Iván LLanco Muñoz, Inspector de la Policía de Investigaciones, quien señaló que se presenta en la audiencia por los hechos ocurrido 27 de julio de 2023. Relató que, en circunstancias que se encontraba a cargo de un vehículo policial de la Brigada de Investigación Criminal de La Florida, dando cumplimiento a una orden de detención, en pasaje Los crisantemos 7008, se bajaron del vehículo los Inspectores Bastián Vargas Collao, el Subinspector Alejandro Villablanca y el detective Hans Vargas Pérez, para hacer las consultas en el domicilio correspondiente, mientras él permaneció al volante. En ese momento se percató que venía ingresando por el pasaje una camioneta a alta velocidad que los enfrentaba, con su placa patente oculta, se comunicó por radio con sus acompañantes advirtiéndoles que tuvieran cuidado porque venía un vehículo a alta de velocidad. Al ver que no tenía la placa patente delantera, decidió que se le efectuara un control al vehículo para lo cual encendió las balizas. El subinspector Villablanca se acercó al vehículo, en el cual había tres sujetos, su compañero les advirtió que era policía e inmediatamente la camioneta comenzó a darse a la fuga en retroceso.

Agregó, que además de contar con las balizas, se encontraban debidamente equipados, con chalecos y equipos radiales.

En el momento que inician la fuga en reversa, su compañero quedó colgado en la ventana del copiloto, la camioneta salió huyendo a gran velocidad e impactó a otro vehículo estacionado y luego en una casa particular, debido a lo cual su compañero salió eyectado. Cuando vieron la situación en que se encontraba el Subinspector Villablanca, salieron todos en persecución del vehículo, recordando que fueron varios metros en los que su compañero fue desplazado en un arrastre. Cuando lo alcanzaron, lo ayudaron a levantarse y lo

subieron al vehículo policial, el subinspector Villablanca le dio cuenta que le habían robado la pistola. Iniciaron la persecución, pero el vehículo que conducían tenía calabozo, por lo cual era más grande y pesado y la camioneta les sacó ventaja. Los sujetos avanzaban a gran velocidad y a su paso embestían a otros vehículos particulares. Los perdieron de vistas unos minutos, pero lograron dar con el lugar donde abandonaron la camioneta.

El vehículo tenía unas placas patentes, las cuales consultó a la central y no tenían encargo. Recordó que les llamó la atención que a las placas patentes le faltaban ciertos sellos holográficos, que eran de un material distinto al convencional y eso los alertaba de que estaban en presencia de un vehículo a lo menos clonado o robado. Requirió la presencia de funcionarios de la sección de recolectores del laboratorio de criminalística y la concurrencia de peritos, presentándose un perito mecánico y un perito en huellas; mientras ellos iniciaron la búsqueda de rastreo de los ocupantes. Finalmente, el perito mecánico que llegó al lugar logró establecer que la placa patente original de ese vehículo era la RHLT.56, y mantenía un encargo vigente por el delito de robo.

Dentro del vehículo encontraron varias llaves universales que se utilizan para clonación de vehículos y dos teléfonos celulares.

El Subinspector Alejandro Villablanca, les refirió que había reconocido al copiloto de la camioneta Jeep, esto es, la persona que le robó el arma, quien era Jeisson Gómez Liberona, porque había sido un blanco de investigación en otra causa y quien vivía en ese pasaje, Los Crisantemos N°701. Se le efectuó un reconocimiento fotográfico a su compañero, quien reconoció a Gómez Liberona con un 100% de seguridad como el copiloto.

Empezaron a filtrar búsquedas de información, análisis de fuentes informativas y lograron obtener a los compañeros de delito que tenía esta persona en ocasiones anteriores, en detenciones o en fichas criminales y en base a ese análisis lo expusieron también a su colega un set fotográfico en el cual reconoció al conductor, Gregory Gómez Vera, resultando que ambos son primos.

Aproximadamente como a las tres de la madrugada se recibió en la guardia un llamado anónimo señalando que el arma iba a ser dejada en un basurero que había en la plaza Salvador Allende, donde la encontraron. La enviaron a pericia, le faltaban tres tiros. Indicó que se trataba de una pistola marca Glock, con un cargador de 17 tiros. Había sido limpiada y no había sido utilizada.

Explicó que el vehículo que utilizaban el día de los hechos mantiene una luz estroboscópica, que es una luz intermitente, además portaban chalecos antibalas, vestían camisa táctica, chaleco negro con reflectante que dice “Policía de Investigaciones de Chile” y pantalón café.

Su compañero estaba en estado de shock, cuando se calmó, le dijo que el copiloto le había pegado en la mano, que forcejearon y le quitaron el arma y su compañero quedó colgando en la ventana del copiloto. Cree que en un primer momento no se dieron cuenta de la presencia policial porque él tenía las luces del vehículo prendidas y probablemente los encandiló, cuando se dieron cuenta ya era tarde para ellos, porque su compañero se acercó advirtiéndoles que era policía y él ya había prendido la baliza, luego cuando su compañero se acercó al vehículo y quedó colgando, no sabe cómo sucedió eso, puede que incluso haya quedado enganchado con el chaleco, que es pesado.

Recuperaron imágenes de la persecución, que estimó de siete minutos aproximado de duración.

Agregó que en el vehículo encontraron dos teléfonos celulares, uno de ellos, marca Honor, levantado con la NUE 1165772, fue conectado al computador en la unidad y aparecía que el nombre del dueño era Gregory.

Informado de las diligencias que se realizaron en los domicilios de los dos sujetos, le indicaron que en la casa de Jeisson, ubicada en Los Crisantemos, encontraron un codificador amarillo para adecuar llaves universales.

Respecto del tercer sujeto no lo alcanzaron a ver y nunca se identificó.

Se le exhibe el set de fotografías N°1, señalando que en la imagen N°1, se observa el vehículo policial de color blanco, en el costado izquierdo se ve a los tres funcionarios policiales y se alcanzan a ver las luces; a su vez se

observa que bajando por calle los Crisantemos, la camioneta se aproxima al lugar donde están ellos; 2) corresponde al mapa de la comuna, se logra observar calle Los Crisantemos, que es el principio de ejecución y el punto donde terminó la persecución, señalando que tomaron dirección al poniente y luego siguieron por avenida la Florida, al llegar a Departamental doblaron al oriente y terminaron en Los Bambúes, esto duró unos 7 a 10 minutos; 3) se observa el tránsito vehicular de avenida La Florida, se ve el Jeep, que va colisionando a alguno automóviles particulares; 5) colisiona a otros vehículos, se observa la patente superpuesta 6) ese lugar corresponde a Los Bambúes con las Lobelias donde quedó el vehículo Jeep el cual colisiona, se ven las luces de freno; 7) acercamiento a la camioneta Jeep 8) se ven las personas que descienden del vehículo y emprenden su huida; 9) se ve un sujeto, 11) una zapatilla 12) imágenes tomadas en el lugar que abandonaron el vehículo, la placa patente en el parabrisas, 13) parte de las diligencias, cuando se conectaba el teléfono es lo que aparece en el computador el nombre Gregory; 14) estuche amarillo utilizado para la codificación de llaves; 15) plaza donde se encontró la pistola 16) basurero donde la encontraron 17) acercamiento al arma encontrada; 18) paño en el que estaba envuelta; 19) arma Glock 17; y 20) número identificador del arma.

El dueño del vehículo, de apellido Gumucio, les relató que se lo sustrajeron desde la comuna de Vitacura, mediante un scanner e hizo la denuncia en la comuna de Chicureo.

Se le exhibe el set N°4, indicando que en la fotografía 18, la imagen muestra el interior del vehículo marca Jeep y se ven los dos celulares que recuperaron; la foto N°23, muestra las cuatro llaves universales de vehículo, denominadas Xhorse, que son las utilizadas para la clonación, explicando que estas llaves se codifican o programan con un código universal para ciertos tipos de camionetas

Se le exhibe video, indicando que se advierte que el vehículo policial tiene las luces traseras prendidas cuando se acerca el Jeep, se ve la luz de freno porque se prende la tercera luz de arriba, indicó que él prendió las luces normales, no las luces altas, cuando todavía no estaba muy cerca el Jeep.

Bastián Andrés Vargas Collao, Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, quien refirió que con fecha 27 de julio de 2203, en circunstancias que diligenciaban órdenes de detención junto con el Inspector Jean Llanco Muñoz, y con el subinspector Alejandro Villablanca Gutiérrez y el Detective Hans Vargas Pérez, alrededor 18:40, en calle Los Crisantemos 7008, se detuvieron en ese domicilio y descendieron Hans, Alejandro y él, mientras Jean Llanca permanecía al volante, estacionado de norte a sur.

Alejandro quedó al costado del vehículo y observaron que desde el sur venía una camioneta, marca Jeep, modelo Grand Cherokee, con la música alta y sin la patente delantera. Alcanzó a hablar con Jean Llanca que los instruyó para que les hicieran un control a los ocupantes del vehículo. Se disponen a acercarse cuando ve que Alejandro ya se acercaba a la puerta del copiloto y se identificaba como policía y a continuación observa como que se agarra de la ventana, momento en que los sujetos retroceden y se lo llevan colgando.

Ese día, dado la tarea que cumplían, vestían con el uniforme del equipo de modelo territorial, chaleco combat que tienen parches a los costados con identificación. Agregó que en el lugar están las luminarias del alumbrado público, pero cuando llegó la camioneta Jeep de frente, el Inspector Llanca prendió las balizas del vehículo policial, que son color azul y que los identifican como institución.

Vio que Alejandro se identificaba como policía y luego alcanzó a ver cómo le iban pegando cuando iba colgando de la puerta, pero después la camioneta retrocedió más rápido y al fondo del pasaje había un vehículo estacionado en la esquina oriente y con la camioneta el conductor embistió al vehículo y también una casa y en ese momento Alejandro salió eyectado entre una nube de polvo. Cuando llegaron a la esquina lo subieron al vehículo policial, que era un furgón que se utiliza para trasladar detenidos. Alejandro estaba muy mal, alterado, lo primero que le dijo fue que lo golpearon y le quitaron a la pistola.

Alejandro reconoció al copiloto porque había sido un blanco de otra investigación, señalando que era Jeisson Gómez Liberona y fue quien lo golpeaba cuando iba afirmado de la ventana del auto. Siguieron al auto

encontrándolo en las Llaretas con los Bambúes, donde los sujetos detuvieron su marcha y se bajaron del vehículo, los buscaron por los pasajes y no los encontraron. La persecución duró entre 5 a 10 minutos. Desde Los Crisantemos al poniente tomaron avenida La Florida, doblaron al norte y llegaron a Departamental y después doblaron hacia el sur, por Las Llaretas. Cuando llegaron vieron que el vehículo estaba chocado, dieron cuenta a la Jefatura, a la Fiscalía y llamaron a personal del Laboratorio de Criminalística. No encontraron en ese momento la pistola y levantaron 15 trozos de huellas y verificaron que la patente que portaba no correspondía al vehículo, y no tenía encargo, sino que éste correspondía a la placa RHLP.56, que presentaba un encargo por robo.

En la unidad, revisaron partes anteriores para ver compañeros de delitos de Jeisson Gómez Liberona y se le realizó al funcionario Villablanca un reconocimiento fotográfico en el cual reconoció a Gregory Gómez Vera. Levantaron los teléfonos celulares que encontraron en el vehículo y uno les llamó la atención, que fue levantado con la NUE 1165772 y que estaba bloqueado, pero lo conectaron al computador y aparecía el nombre Gregory y las huellas también coincidían.

El jefe de la unidad se comunicó con la fiscalía y encontrándose aun dentro del tiempo de la flagrancia fueron a los domicilios que tenían registrados Gregory Gómez Vera y Jeisson Gómez Liberona, además, se activó un plan cadena, que significa que tiene que presentarse toda la dotación completa para las diversas diligencias.

Durante el transcurso de la noche también trasladaron al Subinspector Villablanca a un Cesfam, donde se le efectuó una constatación de lesiones, resultando con una excoriación en la mano izquierda, producto de los golpes que había recibido.

Alrededor de las tres de la madrugada llamó por teléfono a la guardia, una persona que no quiso identificarse, señalando que había dejado el arma en un basurero en plaza Salvador Allende, al concurrir la encontraron. Le faltaban tres municiones del cargador.

Consultado respecto al lugar dónde estaba él cuando ocurrieron los hechos, señaló que en un primer momento no se ve porque la cámara no lo alcanza a captar, pero comenzó a correr casi de inmediato y vio que a su compañero lo golpeaban con un puño, haciendo un gesto que levantaba el brazo reiteradas veces, Alejandro iba colgando con los dos brazos del costado de la ventana derecha.

Se incorporó por la fiscalía, además, **prueba documental**, consistente en: **1)** Parte denuncia N°37, de fecha 27 de julio de 2023, de la Subcomisaría de Chicureo, que da cuenta de la denuncia por robo del vehículo placa patente única RHLT.56; desde la vía pública, en avenida Luis Carrera de la comuna de Vitacura, denuncia efectuada por Miguel Ángel Gumucio Castellón, ocurrido a las 23:31 horas del día 26 de julio de 2023; de propiedad de Mercer Corredores de Seguros; **2)** Acta de encargo de vehículos código EUN N°554497, de fecha 27 de julio de 2023, respecto al vehículo placa patente única RHLT.56, marca Jeep, modelo Grand Cherokee; **3)** Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro del Vehículos Motorizados correspondiente al automóvil P.P.U. RHLT.56, datos del propietario Mercer Corredores de Seguros Ltda.; **4)** Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro del Vehículos Motorizados correspondiente al automóvil P.P.U. LJBR.59; Datos del propietario Pablo Amador Asencio Haro, Repertorio Punta Arenas. Limitaciones al dominio: vehículo con circulación restringida a Zona Franca; y, **5)** Dato de atención de urgencia N°39581463, de fecha 27 de julio de 2023, del Sapu José Alvo, que da cuenta que se atendió en ese Servicio a Alejandro Villablanca Gutiérrez, el día señalado a las 23:37 horas, y en los datos de la atención médica se consigna: lesión tipo excoriación simple en región dorsal de mano izquierda de aproximadamente 0.5 cm.; pronóstico médico legal provisorio: leve.

I.- Respecto del delito de atentado contra la autoridad. -

OCTAVO: Que, analizando la prueba rendida, no fue posible para estas sentenciadoras, de acuerdo con la dinámica de los hechos ocurridos el 27 de julio de 2023, conforme lo han relatado tanto la víctima como los dos funcionarios que lo acompañaban, tener por establecido la existencia de una apropiación de cosa mueble ajena con ánimo de lucro, que es la principal

exigencia del tipo penal, esto es, de robo con violencia invocado por el Ministerio Público.

Es así, que, de acuerdo, tanto con los de todos los funcionarios que se encontraban efectuando diligencias en el pasaje Los Crisantemos, y las imágenes del video exhibidas correspondientes al día de los hechos, el encuentro entre los policías y los tripulantes de la camioneta marca Jeep, modelo Cherokee fue circunstancial. Pudo observarse en las imágenes que mientras el vehículo policial estaba detenido se acerca en dirección contraria a bastante velocidad y enfrentando al vehículo policial la camioneta Jeep; que solo al quedar a un par de metros de distancia se detiene, quedando frente a frente, en un pasaje que es muy angosto y no alcanzan a pasar los vehículos en forma paralela, momento en que se ve salir de un costado a los funcionarios que estaban diligenciando la orden de detención. Estas primeras imágenes, acorde con los dichos con el Inspector Llancao, permiten apreciar que efectivamente las personas que se trasladaban en el Jeep, no alcanzaron a advertir que tanto el vehículo que enfrentaban como las personas que se dirigían a ellos eran funcionarios policiales; solo seguramente, después de ver que esta camioneta prendía las balizas y que una de las personas levantaba el brazo dándoles la señal de detenerse pudieron advertirlo con toda seguridad, aun cuando no hubieran escuchado la orden de detenerse, por las ropas que vestían que los identificaba claramente y por el gesto que les hizo el funcionario que se acercó a ellos en primer lugar, levantando su brazo derecho. Su reacción entonces fue la de comenzar a retroceder, lo que hizo que el funcionario Villablanca apurara el paso y desenfundara el arma. El detalle de lo que sucede inmediatamente a continuación no alcanzó a ser captado por la cámara, solo se alcanza a observar que después de unos segundos el funcionario se encuentra colgando de la ventanilla y es arrastrado por el vehículo. Según el funcionario, al comenzar a moverse hacia camioneta y encontrándose a su lado, al iniciar ésta el retroceso se desestabilizó y debió apoyarse en la ventana con el brazo izquierdo, puesto que en la mano derecha portaba el arma, fue entonces que el copiloto lo tomó de ese brazo y lo tiraron hacia adentro del automóvil. Es difícil desprender de esta acción, con certeza,

que el propósito haya sido la de sustraerle el arma, puesto que también pudo ser la de evitar que les disparara. Tanto el conductor del vehículo como su acompañante ya sabían que estaban eludiendo un control policial y no tenían la intención de someterse a ello, puesto que sabían que el vehículo que conducían era robado; pareciendo posible que con la acción de tomar el brazo del funcionario en el cual tenía el arma, sí podían evitar que les disparase, desviando la dirección de la mano que portaba el arma o haciendo que la soltase.

Asimismo, este análisis, demuestra que al haber advertido que quienes estaban frente a ellos eran policial, y que el funcionario no tomó su arma hasta que no los vio que emprendían la huida, descarta la posibilidad que en algún momento los ocupantes de la camioneta Jeep pudieran creer que los pensaban asaltar.

Por otra parte, si bien, se estableció que el funcionario recibió golpes en el dorso de su mano izquierda, puesto que se contó con el dato de atención de urgencia que constato que mantenía una excoriación en dicha extremidad, lo que también fue observado por el detective Bastián Vargas, en el primer momento cuando siguió a su compañero; no parece que dichos golpes tuviera relación directa con obtener o apropiarse del arma, puesto que ésta la mantenía en la mano contraria, sino que más parecen dirigidos a lograr que este se soltara del vehículo, -atendido lo señalado por el propio funcionario quien señaló haberse desestabilizado al acercarse, lo que lo obligó a afirmarse de la ventana- hasta que el copiloto decidió alzarlo e introducirlo al interior del vehículo.

Todo este análisis, permitió al tribunal encuadrar los hechos en la figura establecida en el artículo 261 en relación con el artículo 262 N°2 del Código Penal, esto es, un atentado contra la autoridad. Que, conforme lo señala la primera norma señalada, *“cometen atentado contra la autoridad. N°2. Los que acometen o resisten con violencia, emplean fuerza o intimidación contra la autoridad pública o sus agentes, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile, cuando aquélla o éstos ejercieren funciones de su cargo.”*

Y a continuación, el artículo 262 del mismo cuerpo legal, indica que la pena se impondrá conforme a las circunstancias en las que se verificare el atentado, señalando en el N°2 *“Si los delincuentes pusieren manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su auxilio.”*

Que, es posible advertir, que la primera norma invocada en la acusación considera como acciones que configuran este delito: a) acometer, b) resistir con violencia, c) emplear fuerza, y d) intimidar, de forma tal que cualquier tipo de obstrucción al correcto desarrollo de la función o misión de las que se halla investidos la autoridad o sus agentes, en el ejercicio de sus funciones, queda comprendido en alguna de estas situaciones y sería constitutivo de este tipo de infracción.

Que, en el presente caso, quedó establecido que las acciones realizadas por los acusados se encuentran comprendidas en la norma, puesto que ejecutaron a lo menos dos de los verbos rectores que se indican, esto es, acometer y resistir con violencia, obstruyendo el correcto desarrollo de la función que realizaban los funcionarios policiales, siendo agredido uno de ellos por ambos acusados, por el copiloto al tomarle del brazo derecho e introducirlo por la ventana en el vehículo y al darle golpes en su mano izquierda y, además, instando al conductor a que acelerara, quien intentó golpear el cuerpo del policía con un vehículo que estaba estacionado mientras colgaba de la camioneta, acometiendo en su contra en forma física, con la clara intención de evitar ser controlados, es decir, cuando los funcionarios se encontraban en el cumplimiento de sus funciones.

Que la intención de los acusados quedó claramente demostrada, además, por el testimonio de dos de los funcionarios que integraban el grupo el día de los hechos, estimándose que entregaron sus versiones en forma totalmente coincidente, de manera imparcial, completa, precisa y detallada sobre lo ocurrido, señalando que la intención que tenían las personas que agredían a su compañero era evidente, por cuanto se desprendía que de la acción realizada, causar lesiones al funcionario para concretar su huida y escapar del control policial.

II.- En cuanto al delito de receptación. -

NOVENO: Que, a fin de acreditar las exigencias del tipo penal de receptación, en primer lugar, el objeto material de la acción, esto es, la cosa mueble robada o hurtada, quedó establecido con las declaraciones del afectado, **Miguel Ángel Gumucio Castellón**, quien manifestó que el 26 de julio de 2023, le robaron su vehículo, marca Jeep, modelo Grand Cherokee, placa patente RHLT.56, en avenida Luis Carrera de la comuna de Vitacura. Su testimonio fue respaldado por el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados, el parte policial que da cuenta de la denuncia que efectuó la víctima en su oportunidad, así como el acta del encargo de búsqueda correspondiente en el sistema de carabineros.

Que, en relación a la tenencia material del vehículo robado, como el elemento subjetivo del tipo penal, - esto es, el conocimiento de quien tiene la especie, que se trata de un bien robado o hurtado, que se exigen para que este ilícito se configure, derivan principalmente de la declaración prestada por el funcionario de Investigaciones, quien señaló que, en el momento que se afirmaba de la ventana del camioneta, mientras el vehículo retrocedía, pudo ver a la persona que estaba sentada en el asiento del copiloto, reconociéndolo como un blanco investigativo que había, tenido en otro procedimiento.

Respecto a Gregory Gómez, también se estableció que iba en el vehículo, por una parte, porque según los dichos del coimputado, le había permitido conducirlo un trayecto corto y, asimismo, por cuanto los funcionarios policiales al encontrar el vehículo abandonado, en su interior hallaron dos teléfonos celulares, uno de los cuales, conectaron al computador en la unidad policial, apareciendo su nombre como usuario. Además, la pericia dactiloscópica realizada por la funcionaria del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones dio cuenta al tribunal que recibió de los funcionarios que levantaron huellas dactiloscópicas en el vehículo, quince (15) muestras, resultando que se pudo establecer que ocho (8) de ellas correspondían a Gregory Gómez Vega.

Que, así las cosas, quedó establecido que los dos acusados circulaban en el vehículo marca Jeep, modelo Cherokee, placa patente única RHLT.56, que había sido sustraído la noche anterior a su usuario.

Que, respecto al elemento subjetivo del tipo penal, - esto es, el conocimiento de quien tiene la especie, que se trata de un bien robado o hurtado, que se exige para que este ilícito se configure -, estos juzgadoras estiman que en primer lugar, se contó con los testimonios de los señalados funcionarios de la policía de Investigaciones que pretendieron hacer un control vehicular, al advertir uno de ellos que la camioneta no portaba su patente delantera en el lugar que corresponde, sino que el interior del vehículo arriba del tablero, ante lo cual los ocupantes del móvil, pusieron reversa y decidieron huir, saliendo del pasaje a gran velocidad, introduciendo incluso al funcionario que se acercó rápidamente a la camioneta, por la ventana y arrastrándolo con ellos.

Que, en este punto se hace necesario analizar la versión alternativa que entregó en la audiencia el encausado Gómez Liberona, respecto a que en horas de la mañana había comprado el vehículo a una mujer, realizando los trámites en una Notaría en La Cisterna. Previo a entrar en un análisis detallado de ella, se estimó necesario recordar que, si bien, se ha señalado que la declaración del acusado constituye un medio de defensa, sin embargo, una vez prestada, entendiendo que lo ha hecho en forma voluntaria, se transforma en un medio de prueba y puede ser valorada de acuerdo con las reglas generales que rigen en la actualidad en materia penal. Los autores Cristian Duce y Mauricio Riego, así lo plantean, señalando que *“No obstante, la cuestión es que, reconocida la plena autonomía del imputado para declarar o no hacerlo, si de hecho éste declara en el juicio es necesario entender que su declaración se transforma, ahora sí, en un medio de prueba. Es decir, se trata de una información que los jueces deberán valorar en su sentencia, pudiendo analizar su credibilidad y de la cual podrán extraer conclusiones útiles para formar su convicción, siendo plenamente aplicable a este efecto la regla general sobre libertad de prueba de los artículos 295 y 297.”* (M. Duce J. y M. Riego R., Proceso Penal, Ed. Jdca. De Chile., 1º Ed. Pág.470)

De esta manera, no fue posible dar crédito a la teoría alternativa presentado por el acusado, la que fue desvirtuada por la prueba del ente persecutor y, además, por no tener respaldo alguno de la supuesta compra del

vehículo, al no haber acompañado esta escritura en la cual la mujer que habría dicho ser la dueña le transfería el vehículo ni tampoco las supuestas conversaciones que habría mantenido con la mujer por Market Place, aduciendo que se habían borrado. No es posible atender una explicación tan burda por el solo hecho de justificarse que era la primera vez que compraba un vehículo, aun aceptando que pueda transferirse un vehículo con prenda, debe existir una mínima preocupación de cotejar el nombre de la supuesta persona que le da el poder, con los que aparecen en la documentación del vehículo, es decir, no hubo la menor preocupación por saber quién aparecía como propietario, a lo menos, con la revisión del permiso de circulación y si este correspondía con el de la supuesta vendedora; ya que al respecto nada dijo el acusado. Tampoco tuvo preocupación por solicitar un recibo del dinero que habría entregado, porque para él habría bastado el poder notarial que recibió, el cual dejó abandonado en la casa de su expareja.

Todos esos aparentes descuidos hacen insostenible su versión y, además, la demostración que aquello no fue efectivo se estableció sin duda alguna, por la acción que realizaron los ocupantes de la camioneta al percatarse que serían controlados por funcionarios policiales.

La segunda parte de su relato, por lo cual pretende justificar la huida, esto es, no haber advertido que quienes le hicieron la señal de alto eran policías y que al encontrarse apuntado con un arma después de ver que intentaban huir, le habría llevado a creer que iban a ser asaltados, tampoco tiene asidero alguno, desde que los funcionarios se encontraban diligenciando una orden de detención, motivo por el cual vestían las ropas características de la Institución, descritas por los tres policías, la camioneta quedó aproximadamente a dos o tres metros de distancia del furgón policial, enfrentándolo, de manera que pudieron ver las balizas que prendió el conductor de dicho móvil, el Inspector Llancao y la identificación que daba cuenta que pertenecía a la policía de Investigaciones de Chile. Si bien es atendible estimar que inicialmente no se percataron que el furgón que estaba en la calle y las personas que lo rodeaban eran policías, porque podrían haberse visto encandilados, motivo por el cual llegaron hasta tan cerca, es evidente que al detenerse si se dieron cuenta que se trataba de un

vehículo policial y que las personas que intentaron controlarlos eran funcionarios policiales, por las razones recientemente entregadas; descartándose también que tuvieran alguna justificación para creer que iban a ser asaltados.

De acuerdo con el video exhibido en la audiencia, fue posible advertir, que en el momento que el Subinspector Villablanca se adelanta a sus compañeros levantando el brazo derecho haciendo una señal que se detuvieran, dio tres pasos hacia el vehículo y ese es el momento en que los ocupantes de la camioneta inician el retroceso, viendo esta acción que demostraba su intención de huir, fue que el funcionario da otros tres pasos en forma más rápida y se acerca a ellos, mientras va sacando su arma de servicio. Lo anterior demuestra que antes que el inspector tomara su arma, los ocupantes de la camioneta decidieron huir, evidenciando que no pretendían someterse a un control policial y esta decisión de escapar del lugar, permite concluir que sabían que el vehículo tenía un origen espurio, al advertir que las personas que intentaron controlarlos eran funcionarios policiales.

A lo anterior se suma, las cuatro llaves universales que son utilizadas para abrir vehículos, que fueron encontradas luego de haber sido abandonada la camioneta por los hechores en el asiento del mismo vehículo y el aparato que fue encontrado en el domicilio de Jeisson Gómez, que correspondía a un juego de codificadores de llaves para vehículos.

Todas las consideraciones anteriores, llevaron al tribunal a estimar que se establecieron los dos elementos analizados, tanto la tenencia o disposición del vehículo robado, como el conocimiento de parte de los acusados de la situación en que se encontraba el móvil, esto es el elemento subjetivo, que fue posible tener por establecido, además, por las acciones realizadas por dos de los autores cuando fueron sorprendidos por los funcionarios Investigaciones, lo que viene a estimarse como demostrativo del conocimiento que tenían esos dos ocupantes del origen ilícito del móvil.

DÉCIMO: Que, en relación a la **participación** de los encausados **Jeisson Gómez Liberona** y de **Gregory Gómez Vera**, tanto en el **delito de atentado contra la autoridad como en el de receptación**, pudo ser colegida de la misma prueba de cargo aportada por el Ministerio Público,

desprendiéndose de manera especial de los testimonios entregados por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, en cuanto a Jeisson Gómez, especialmente por la declaración del Subinspector Villablanca, quien luego de ser introducido parte de su cuerpo en el interior del vehículo, pudo advertir que el copiloto, -que fue quien lo había tomado del brazo e introducido-, había sido un blanco investigativo en otra pesquisa que se había llevado en la unidad policial a la que pertenece, identificándolo como Jeisson Gómez Liberona.

Respecto a Gregory Gómez, su participación también fue establecida por los dichos de los funcionarios policiales que dieron cuenta que habían encontrado un teléfono al interior del vehículo que, al ser conectado a un computador, indicó que el nombre de su usuario era Gregory; así como los siete trozos de huellas dactilares, tomadas desde el vehículo sustraído, que se estableció por la perito Claudia Cisternas, que pertenecían a este acusado.

Que, todos estos antecedentes, concatenados, han configurado múltiples indicios de suficiente fuerza, que permitieron obtener al tribunal la convicción de la participación de los dos acusados en los dos delitos que fueron establecidos, unidos al reconocimiento que hizo el acusado Jeisson respecto a que se encontraba en el interior de la camioneta, justificándose que la había comprado, afirmación que fue totalmente desvirtuada.

Que, en conclusión, el tribunal tuvo por acreditada, más allá de toda duda razonable, la participación de los acusados, como coautores, de un delito de atentado contra la autoridad y en un delito de receptación establecidos, conforme lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código penal, al haber tenido todos ellos una participación directa en los ilícitos.

UNDÉCIMO: Que, las pruebas señaladas precedentemente, han sido ponderadas por el Tribunal conforme a las normas del artículo 297 del Código Procesal Penal y, teniendo presente que los testigos depusieron en la audiencia debidamente juramentados o prometiendo decir verdad, de manera clara y precisa, entregaron detalles y dieron razón de sus dichos, siendo coherentes y encontrándose contestes, impresionaron como imparciales y verídicos; sin que por otra parte fueran contradichos por alguna otra prueba, advirtiéndose, así, una completa armonía y coincidencia en sus relatos en

todos sus aspectos centrales; aseveraciones que resultaron plenamente coincidentes con la evidencia fílmica y fotográfica reconocida en juicio por dichos testigos e informes periciales, según se señaló en cada caso, lo que contribuye a proveer de verosimilitud los relatos aportados en la audiencia; siendo posible tener por acreditados los siguientes hechos:

“El día 27 de julio del año 2023, a las 18:40 horas aproximadamente, en circunstancias que funcionarios de la Brigada de Investigación criminal de La Florida, efectuaban labores propias de su cargo, en Pasaje Los Crisantemos frente al número 7008, comuna de La Florida, llegó al lugar un vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, que no portaba la placa patente delantera, conducido por el acusado Gregory Issac Gómez Vera. Al vehículo se acercó el Subinspector Alejandro Villablanca Gutiérrez, con la finalidad de realizar un control vehicular, por el costado del copiloto, donde se encontraba el acusado Jeisson Edmundo Gómez Liberona, indicándole a viva voz la palabra “Policía”, momento en que los acusados comienzan a darse la fuga marcha atrás y al acercarse el Subinspector Villablanca fue tomado del brazo e introducido en el vehículo, quedando con la mitad del cuerpo al interior del móvil.

El acusado Gómez Liberona, golpeó al Subinspector Villablanca, en su mano izquierda y le arrebató su arma de servicio correspondiente a una pistola marca Glock, modelo 17, Serie N° BMCH562, calibre 9 Milímetros, con su cargador respectivo con 17 cartuchos, mismo calibre, para evitar ser controlados. Luego, los acusados impactan el vehículo en que se movilizaban con otro vehículo que estaba en el lugar, como así también el frontis de un domicilio, saliendo eyectado el Subinspector Villablanca, resultando con lesiones. Luego de una persecución, los acusados dejan abandonado el vehículo en el que se movilizaban, dándose a la fuga y llevándose el arma.

El vehículo en el que circulaban los acusados portaba en la parte trasera, la placa patente con la sigla LJBR.59, que corresponde a un vehículo marca Jeep, modelo Gran Cherokee, color gris, la cual presentaba signos evidentes de encontrarse adulterada, tanto por el material de su composición como por la falta de signos holográficos y la irregular forma de sus letras y números. Al verificar el número de motor y chasis, se logra determinar que en

realidad le corresponde la placa patente RHLT.56, también correspondiente a un vehículo marca Jeep, modelo Gran Cherokee, color gris grafito, el cual mantenía encargo vigente por el delito de robo, código EUN N 554497, denuncia realizada por la víctima Miguel Ángel Gumucio Castellón, en la Subcomisaria de Chicureo, con fecha 27 de julio de 2023; no pudiendo los acusados menos que conocer el origen ilícito del vehículo, esto es por las circunstancias propias del procedimiento policial, la utilización de patentes falsas de un vehículo de similares características, como así también el hecho de mantener en el asiento trasero una bolsa de género, que tenía en su interior cuatro llaves de vehículos tipo control inteligente.”

Que, en consecuencia, los hechos referidos precedentemente, son constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad, ilícito previsto en el artículo 261 del Código Penal en relación con el artículo 262 N°2 del mismo cuerpo normativo y, de un delito de receptación, previsto y sancionado en el artículo 456 Bis A del Código Penal; encontrándose ambos en grado de desarrollo consumado.

DUODECIMO: Que, en la audiencia que prescribe el artículo 343 del Código Procesal Penal, los intervinientes debatieron en relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y respecto a los demás factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, oportunidad en la cual Ministerio Público, señala en relación con Jeisson Gómez que registra condena en su Extracto de Filiación y Antecedentes, correspondiente al RIT 164-2022, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de amenazas. Condenado el 17 de octubre de 2022, a la pena de 93 días de presidio menor en su grado mínimo.

Por el delito de atentado a la autoridad, solicita la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y, respecto del delito de receptación, mantiene la solicitud de pena de la acusación, esto es, de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más el pago de una multa de veinte unidades tributarias mensuales.

En cuanto al acusado Gregory Gómez Vera, hizo presente que tiene una condena como menor de edad, impuesta en la causa RIT 5.469 del Juzgado de Garantía de San Antonio, en la que por sentencia de 30 de noviembre del año

2022 fue condenado a tres años y un día de libertad asistida y, si bien en el extracto de filiación, como adulto, no tiene condenas, solicita las mismas penas requeridas para el coimputado; además, del comiso de las especies incautadas.

La defensa de Jeisson Gómez Liberona, en relación con el delito de receptación, invocó la atenuante establecida en el N°9 del artículo 11 del Código Penal, por haber renunciado a su derecho a guardar silencio, prestando declaración en la audiencia colaborando de manera sustancial, porque admite que le dice a Gregory que ponga marcha atrás, entregó el arma y realizó el llamado para entregarla y ésta fue encontrada. Solicitó, asimismo se considere que en la sustracción del vehículo no medio violencia, pidiendo se le condene a tres años y un día de presidio menor en su grado medio y multa de dos unidades tributarias mensuales, conforme lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, esto es, por sus facultades económicas se verán restringidas si la pena se cumple de manera efectiva.

Respecto al atentado contra la autoridad, requirió igualmente el reconocimiento de la atenuante de colaboración sustancial y le aplique la pena de multa de 11 unidades tributarias mensuales.

A su turno, la defensa de Gregory Gómez Vera, solicita el reconocimiento del artículo 11 N°6 del Código Penal, para ambos delitos, por cuanto en su extracto de filiación y antecedentes no registra condenas, solo tiene una sanción como adolescente de acuerdo con la Ley N°20.084, que es un estatuto especial, lo que implica que no es una pena propiamente tal, sino que una sanción. Mencionó fallos de la Excm. Corte Suprema que acogen esta teoría, conforme con las reglas de Beijing.

En el delito de atentado contra la autoridad, solicita que se le imponga la pena pecuniaria y el mínimo de la multa y en subsidio, en caso de no reconocerse la atenuante, mantiene la petición, en atención a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal y, en consideración a que las lesiones son leves.

En cuanto al delito de receptación, solicita se le imponga la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado medio, en consideración a la atenuante que le beneficia y a que no hay agravantes.

Solicitó, además, se le abone el tiempo que está privado de libertad por esta causa.

Respecto del modo de cumplimiento solicitó se le conceda la libertad vigilada intensiva, solicitando se le otorgue un plazo para acompañar los informes periciales.

En su réplica el Ministerio Público se opuso al reconocimiento del artículo 11 N°9 del Código Penal, solicitado por la defensa de Jeisson Gómez, por cuanto en su declaración, el acusado negó los hechos, presentó una teoría alternativa y fue su prueba la que hizo posible acreditar los delitos.

En relación con la atenuante del artículo 11N°6 del Código Penal, se opone a su reconocimiento porque tiene sanción por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con la cual entiende que el criterio es que aquella sanción no es útil para configurar una agravante, pero no para considerar que no tiene un reproche penal pretérito.

DÉCIMO TERCERO: Que las solicitudes planteadas en la audiencia resumida precedentemente fueron resueltas como sigue:

En cuanto a la procedencia de la atenuante establecida en el N°9 del artículo 11 del Código Penal, esto es, si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, será rechazada por la unanimidad del Tribunal, atendido a que no concurren los requisitos que exige la ley para tenerla por configurada. Si bien, el acusado declaró en la audiencia, no es posible calificar su declaración como una colaboración sustancial, ya que se ha entendido que ello significa “realizar un aporte de real y efectiva significación, de importancia y trascendencia en la clarificación del hecho”, como lo define el Profesor Garrido Montt, (Derecho Penal, Tomo I, pág.200), lo que en el presente caso no ha ocurrido, ya que fue posible constatar que el acusado no fue veraz en su relato, presentó una teoría alternativa con la intención de lograr impunidad, la que fue rechazada al carecer de sustento alguno.

-Que en relación a la atenuante establecida en el N°6 del artículo 11 del Código Penal, el Tribunal ha estimado que acoger la atenuante invocada por la defensa de Gómez Vera, por cuanto resulta compatible con los principios internacionales que consagran las Reglas de Beijing, aprobadas por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, especialmente, la regla 21.2 de dicho acuerdo internacional que establece que “Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente.” Esta exclusión aparece del todo concordante con los objetivos que persigue la Ley N°20.084, esto es, imponer un estatuto jurídico especial para los adolescentes, tomando en consideración la necesidad de un tratamiento diferente que requiere el sujeto que se encuentra en una etapa formativa y que no ha completado los procesos de desarrollo de la persona al no haber alcanzado aún la mayoría de edad, debiendo centrarse el interés del estado en protegerlos en su desarrollo físico y mental y darles asistencia en su inserción social.

Comparte el Tribunal la opinión del profesor Miguel Cillero (Comentario artículo 10 N°2 del Código Penal, Código Penal Comentado. Parte General. Doctrina y Jurisprudencia. Legal Publishing Chile, Santiago, 1a Edición. Págs. 202 - 209), en cuanto sostiene que la Ley 20.084 -cuyos fundamentos normativos se encuentran en el ordenamiento jurídico chileno en la Convención sobre los Derechos del Niño-, establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley penal que constituye una reforma trascendente desde el punto de vista de la teoría de la culpabilidad, ya que con ella se establece un Derecho penal de adolescentes especial, que reconoce en el adolescente una especial capacidad de culpabilidad y contempla consecuencias jurídicas consistentes en medidas, diferentes a las penas que se les imponen a los adultos.

Este especial estatuto supone la existencia de un sujeto responsable, cuya responsabilidad debe obedecer a las particularidades de su desarrollo personal y social. Es así que el análisis de la capacidad individual de la persona menor de edad “de comprender y querer normativamente” (imputabilidad en sentido tradicional) debe desplazarse a un examen más complejo, que el profesor Juan Bustos divide en tres niveles; un primer nivel dado por una exigibilidad sistémica, que remite a la capacidad del sistema para exigir una respuesta determinada, considerando circunstancias concretas de vida del adolescente, como sus diferencias culturales, su vulnerabilidad social, sea por pobreza u

otra causa, que de no considerarse, pueden llevar a una criminalización selectiva y discriminatoria de esas formas de vida, las cuales el sistema debe asumir en el marco de las diferencias existentes en una sociedad plural y desigual (Bustos, Juan. Derecho penal del niño-adolescente, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2007, pp. 27.38). El segundo nivel es el de la exigibilidad de la conciencia del injusto”, es decir atender a si el adolescente “estaba en condiciones de tener conciencia de afectar un bien jurídico”, lo que constituye una exigencia mayor al mero conocimiento y exige una “internalización” cultural, de valores, más profunda. Lo que se pretende indagar es si lo prohibido es parte del proceso de elaboración interna del adolescente o la persona en general. (Bustos, 2007, 39), Finalmente el tercer nivel señala que debe ser exigible al adolescente que su conducta se adecue a su “conciencia de lo prohibido” de modo tal que la exigencia no vaya más allá de la capacidad de respuesta que tenga éste.

En ese sentido, estamos en presencia de una distinción de dos tipos de responsabilidad penal, la del adolescente y la del adulto y cada una de ellas supone una capacidad de culpabilidad específica, lo que permite concluir que las conductas contrarias al ordenamiento jurídico cometidas por el adolescente no tienen la relevancia que acarrearán las llevadas a cabo por el adulto.

En consonancia con lo anterior, estas sentenciadoras han decidido acoger la atenuante de irreprochable conducta anterior, en relación con el sentenciado Gregory Gómez Vera, respecto de ambos delitos por los cuales resultó responsable.

Que, ambas defensas solicitaron se imponga a sus representados la pena pecuniaria en lugar de la corporal, sin embargo, este caso el tribunal estimó que no es posible condenar a los acusados a una pena de multa, dada la gravedad de los hechos en que se desarrolló el delito de atentado contra la autoridad, por cuanto, aun cuando al funcionario afectado se le constató una lesión física de carácter leve, es posible suponer, bajo las reglas de la lógica y las máximas de las experiencias, que las secuelas emocionales debieron ser muy graves, desde que pudo sentir que su integridad física corrió un grave peligro, que incluso pudo haber muerto si el conductor hubiera logrado

golpearlo contra otro automóvil o con un muro, como pretendió, o haber sido arrollado por el mismo vehículo, lo que demuestra inequívocamente que si salvó ileso fue solo algo fortuito; por lo cual se estimaron acciones de gravedad respecto de las cuales aparece más proporcional imponer una pena corporal restrictiva de libertad.

Que, en el caso de Gómez Vera, se rebajará la multa que se debe imponer por el delito de receptación, atendido la atenuante que le beneficia.

DÉCIMO CUARTO: Que, respecto a la forma de cumplimiento que solicitó la defensa para el acusado Gregory Gómez Vera, esto es, bajo la pena sustitutiva de libertad vigilada, el Tribunal estimó que no procede concederla, al no reunirse en su caso los requisitos señalados en la norma para su procedencia, especialmente la exigencia contenida en el número 2 del artículo 16 de la Ley 18.216, esto es, *“que de los antecedentes sociales y características del condenado su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren concluir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social”*, por cuanto quedó demostrado que, habiéndolo sido sancionado con una medida de Libertad asistida, que tiene el mismo objetivo que la que se solicita, demostrándose así que evidentemente aquella no dio resultado, desde que el delito por el cual actualmente se le procesa, lo cometió solo unos meses después.

Asimismo, se tuvo presente, que de acuerdo con lo informado por el jefe de unidad de causas de este tribunal, actualmente el condenado Gómez Vera, se encuentra en prisión preventiva por una causa que se sigue en el 4° Juzgado de de Garantía de Santiago, antecedentes dan cuenta de una conducta anterior que alejan la posibilidad de adquirir la presunción requerida en la norma.

Que, el informe psicológico realizado por el psicólogo Oscar Soto Cárdenas, concluyó que Gregory Gómez Parra no presenta contraindicaciones psicológicas ni de salud mental inhabilitantes, para acceder a una pena sustitutiva en el caso de una eventual condena, con una figura de autoridad

que cautele los requisitos de otorgamiento de este beneficio y en base a un plan de intervención que reduzca la probabilidad de reincidencia delictual, apoyándose en los factores protectores que presenta el imputado. Asimismo, el informe social elaborado por Alfredo Cornejo Peña, en sus conclusiones manifestó que, desde la perspectiva social, Gregory Gómez Vera, es un adulto, que presenta indicadores de arraigo familiar, y habitacional. No presenta consumo problemático de sustancias. No existe contagio criminógeno. Destaca apoyo de madre, doña Cinthia Vera Rosas, quien se compromete a apoyarlo y a actuar como un mecanismo de control social frente a posibles conductas disruptivas del informado. Considerando lo anteriormente expuesto, Gregory Gómez Vera, cuenta con las condiciones de arraigo social, para optar a beneficios de penas sustitutivas no privativas de libertad.

Que, sin embargo, para el tribunal éstas conclusiones no fueron suficientes para revertir las circunstancias señaladas en el primer y segundo párrafo de este Considerando, puesto que en forma concreta no es solo la anotación que registra como menor de edad el sentenciado Gregory Gómez, la que obsta al cumplimiento del número 2 del artículo 16 de la Ley N°18.216, sino que la inutilidad de una pena sustitutiva de este tipo, puesto que encontrándose cumpliendo una de naturaleza muy similar cometió este delito y, después de ello se ha visto involucrado en otros hechos por lo cuales se encuentra en estos momentos en prisión preventiva.

DECIMO QUINTO: Que, los acusados **Jeisson Gómez Liberona** y **Gregory Gómez Vera** son responsables de un delito de atentado contra la autoridad, ilícito previsto en el artículo 261 N°2 y 262 N°2, ambos del Código Penal, que está sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de seis a diez Unidades Tributarias Mensuales.

Que, en el caso del acusado, **Gómez Liberona**, no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad que analizar y conforme lo previsto en el artículo 67 del Código Penal, al imponer la pena el tribunal puede recorrerla en toda su extensión, tomándose en este caso en consideración la gravedad de las acciones realizadas en contra del Subinspector de la Policía

de Investigaciones Alejandro Villablanca, lo que justifica imponerla en el máximo del grado señalado por la ley.

Que, respecto del acusado **Gómez Vera**, le beneficia solo una minorante de responsabilidad penal, sin que le perjudique alguna agravante, motivo por el cual el tribunal al imponer la pena lo hará en el mínimo del grado señalado, imponiéndose en el quantum que se indicará en la parte resolutive, tomando en consideración los motivos ya señalados para su copartícipe.

Que, además, los acusados resultaron responsables de un delito de receptación de vehículo motorizado previsto en el artículo 456 bis A del Código Penal, sancionado en su inciso tercero con presidio menor en su grado máximo y multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales.

Que, en el caso del acusado, **Gómez Liberona**, no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad que analizar y conforme lo previsto en el artículo 67 del Código Penal, al imponer la pena el tribunal puede recorrerla en toda su extensión, considerando en este caso los graves daños con los cuales resultó el vehículo receptado, según lo señalado por el perito mecánico y el afectado Miguel Gumucio.

Que, respecto del acusado **Gómez Vera**, le beneficia una atenuante, sin que le perjudique alguna agravante, motivo por el cual el tribunal al imponer la pena lo hará en el mínimo del grado señalado, indicándose el quantum en lo resolutive de esta sentencia, tomando en consideración, también, los daños con los cuales resultó el vehículo receptado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°6, 14 N°1, 15 N°1, 26, 49, 50, 67, 69, 74, 291, 292 N°4 y 456 Bis A del Código Penal; artículos 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; y, artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales se resuelve:

I.- Que se **condena**, a **JEISSON EDMUNDO GÓMEZ LIBERONA**, ya individualizado, a la pena **de CINCO AÑOS de presidio menor en su grado máximo**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el

tiempo de la condena, en calidad de autor de un delito de receptación de vehículo motorizado, cometido el día 27 de julio de 2023, en la comuna de La Florida, de esta ciudad.

II.- Que se **condena**, además, a **JEISSON EDMUNDO GÓMEZ LIBERONA**, ya individualizado, al pago de una **multa de VEINTE unidades tributarias mensuales**. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Para proceder a esta sustitución se requerirá el acuerdo del condenado, quedando exento del apremio, conforme lo dispuesto en el artículo 49 inciso final del Código Penal.

III.- Que se **condena** a, **JEISSON EDMUNDO GÓMEZ LIBERONA**, ya individualizado, **a la pena de TRES AÑOS de reclusión menor en su grado medio** y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de **atentado contra la autoridad**, previsto y sancionado en los artículos 261 N°2 y 262 N°2, ambos del Código Penal, cometido el día 27 de julio de 2023, en la comuna de La Florida, de esta ciudad.

IV.- No reuniéndose los requisitos de la Ley N°18.216, no se concede al ahora sentenciado, **JEISSON EDMUNDO GÓMEZ LIBERONA**, ninguna de las penas sustitutivas contempladas en dicha ley, por lo que deberá cumplir efectivamente las penas corporales impuestas, las que se le comenzarán a contar desde el día tres de abril de dos mil veinticuatro, fecha desde la que ha permanecido privado de libertad por esta causa, según se indica en el certificado extendido por el Jefe de unidad y administración de causas de este Tribunal.

V.- Que, se **condena** a **GREGORY ISAAC GÓMEZ VERA**, ya individualizado a la pena **de CUATRO AÑOS de presidio menor en su grado máximo**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor de un delito de receptación de vehículo motorizado, cometido el día 27 de julio de 2023, en la comuna de La Florida, de esta ciudad.

VI.- Que, se **condena** a **GREGORY ISAAC GÓMEZ VERA**, ya individualizado, **al pago de una multa de DIEZ unidades tributarias mensuales**. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Para proceder a esta sustitución se requerirá el acuerdo del condenado, quedando exento del apremio, conforme lo dispuesto en el artículo 49 inciso final del Código Penal.

VII.- Que se **condena** a, **GREGORY ISAAC GÓMEZ VERA**, ya individualizado, **a la pena de OCHOCIENTOS DÍAS de reclusión menor en su grado medio** y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de **atentado contra la autoridad**, previsto y sancionado en los artículos 261 N°2 y 262 N°2, ambos del Código Penal, cometido el día 27 de julio de 2023, en la comuna de La Florida, de esta ciudad.

VIII.- Que, no reuniéndose los requisitos de la Ley N°18.216, no se concede al ahora sentenciado, **GREGORY ISAAC GÓMEZ VERA** ninguna de las penas sustitutivas contempladas en dicha ley, por lo que deberá cumplir efectivamente las penas corporales impuestas, sirviéndole de abono el día 23 de agosto de 2024, que permaneció detenido por esta causa, atendido a que comenzó a continuación a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 6.737-2023 de ese tribunal.

IX.- Que, ambos, sentenciados, **GÓMEZ LIBERONA** y **GOMEZ VERA**, deberán cumplir las penas que le fueron impuesta en orden sucesivo, principiando por la más grave, ósea la más alta en la escala respectiva.

X.- Que, se decreta el comiso de las especies incautadas durante la investigación de esta causa y contenidas en las N.U.E 1165772, 1165771, 1165776, 1165777, 1165774 y 6861732.

XI.- Que, habiéndose condenado a los sentenciados **Gómez Liberona** y **Gómez Vera**, por delitos a los cuales la ley asigna pena aflictiva, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°18.556 modificada por la Ley N°

20.568, oficiándose al efecto al Servicio Electoral, al tenor de dicho precepto, en su oportunidad, una vez ejecutoriado el presente fallo.

XII.- Que, no se condena en costas a ambos sentenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, por encontrarse privados de libertad y, además, por haber sido defendidos por la Defensoría Penal Pública.

Ofíciase a los organismos que corresponda comunicando lo resuelto y, remítase copia de esta sentencia al Juzgado de Garantía que corresponda, para la ejecución de las penas impuestas.

Regístrese y notifíquese

Redactada por la Juez Sra. Olga María Ortega Melo.

RIT N°216-2024.

Sentencia dictada por la Sala del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los Magistradas Titulares, Alejandra García Bocaz y Olga María Ortega Melo y la Juez Titular del Segundo tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, Tatiana Escobar Meza, subrogando legalmente.